



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: JAMILE EUGENIA GUZMÁN RODRÍGUEZ
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. Y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 014 2019 00416 01
Sentencia: S-223

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las codemandadas PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., al igual que el grado jurisdiccional de Consulta concedido a favor de COLPENSIONES, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín 22 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

JAMILE EUGENIA GUZMÁN RODRÍGUEZ demandó a PROTECCIÓN S.A., a PORVENIR S.A. y a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS - por cuanto no se le proporcionó

una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES, sin solución de continuidad, en atención al engaño y la inducción a error, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos, junto con las cuotas de administración debidamente indexadas. Pide además se ordene a Colpensiones a reconocer la pensión de vejez de la demandante en los términos de la ley 797 de 2003, a partir del retiro del sistema, y la correspondiente indexación de las mesadas pensionales de causarse.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 5 de abril de 1961, se afilió en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en el año 1981 y se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PORVENIR S.A. el 29 de noviembre de 1999. Aduce que PORVENIR S.A. no le brindó una asesoría clara, comprensible y completa acerca del tema pensional, toda vez que no se le explicó ni le brindó información respecto a las características de dicho régimen, ni las diferencias, las modalidades de pensión, la forma cómo construir la prestación y cuáles eran las consecuencias si no acumulaba el capital mínimo para la pensión del 110%; tampoco le explicaron el derecho al retracto, no se le informó sobre el aporte voluntario, tampoco que el RAIS tenía relación directa con el sistema financiero. Agrega que en el mes de noviembre de 2003 se trasladó a PROTECCIÓN S.A. pero que dicha entidad tampoco le explicó las diferencias entre regímenes, además de las características para obtener una pensión en el RAIS. Dice que PROTECCIÓN no le dio un buen consejo sobre la amnistía del año 2003 para regresar al RPMPD, y que durante el tiempo que estuvo afiliada no le brindó asesoría. Refiere que retornó en noviembre de 2011 a la administradora PORVENIR S.A., sin embargo, esta vez tampoco le informaron sobre las modalidades de pensión, las características y sus diferencias respecto del RPMPD, no le indicaron los riesgos, tampoco las desventajas. Manifiesta que PORVENIR S.A. el 15 de mayo de 2019

realizó una proyección de la pensión en el RAIS y en el RPMPD, siendo en este último régimen la mesada pensional por el valor de \$1.905.100, y en el de Ahorro Individual de \$828.116, diferencia que se traduce en un perjuicio para ella. Por último, indica que presentó derechos de petición ante PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. agotando la reclamación administrativa.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, **COLPENSIONES** dice que no le consta ninguno de los hechos expuestos por la parte demandante, ya que se trata de situaciones entre terceros en los que no tuvo participación. Se opone a las pretensiones por carecer de fundamentación fáctica y legal, además de que incumbe a la actora probar los supuestos de hecho y de derecho de sus pretensiones. Como excepciones de fondo propuso imposibilidad de retornar al régimen de prima media con prestación definida por falta de requisitos legales, improcedencia de la declaratoria de invalidez del traslado, inexistencia de la obligación de reconocer perjuicios, devolución de cuotas de administración, petición antes de tiempo o inexistencia de la obligación de reconocer pensión de vejez, prescripción, buena fe, compensación, imposibilidad de condena en costas.

Por su parte **PROTECCIÓN S.A.** admite la fecha de nacimiento de la demandante, no le consta la de afiliación al RPMPD. Respecto a la suscripción y vinculación de la actora al RAIS en la administradora PORVENIR S.A., indica que esa AFP no tiene ninguna injerencia por lo que le corresponde a la parte demandante probar los hechos en el curso del proceso. Niega que esa entidad no le hay brindado información y una asesoría integral y completa respecto a las implicaciones de tomar la decisión de traslado; refiere que le indicó a claramente todas las características, regulaciones del RAIS, asimismo los rasgos diferenciadores, señalándole con toda claridad la forma de constituir la pensión. Agrega que la demandante tampoco optó por

regresar al RPMPD, no hizo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la ley 100 de 1993. Sostiene que no le consta la proyección pensional realizada por PORVENIR S.A., tampoco los derechos de petición enviados a Colpensiones y a PORVENIR S.A. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, falta del juramento estimatorio de perjuicios como requisito procesal, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, innominada o genérica, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, traslado de la totalidad de los aportes a PORVENIR S.A.

A su turno, **PORVENIR S.A.** dice que no le constan los hechos relacionados con COLPENSIONES, tampoco la fecha de afiliación de la demandante a PROTECCIÓN S.A. Sobre los hechos dice que no son ciertos, puesto que la actora se vinculó válidamente a esa AFP en el año 1999 con ocasión de su traslado del RPMPD, AFP que le otorgó a una asesoría íntegra, veraz, oportuna, conforme se desprende de la solicitud de afiliación, documento que se presume auténtico y del que se tiene que la actora conocía todas las implicaciones de su decisión, las condiciones básicas de operación y funcionamiento del RAIS. Refiere que la demandante, según el certificado de ASOFONDOS en el año 2003 decidió trasladarse a la AFP ING S.A., y luego retornar en el año 2012 a esa AFP PORVENIR, lo que ratifica su voluntad de permanencia en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Como excepciones de fondo propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, excepción genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2021 el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia de la afiliación al RAIS de la señora JAMILE EUGENIA GUZMÁN RODRÍGUEZ al RAIS administrado por la sociedad PORVENIR S.A., así como el posterior traslado de la actora a PROTECCIÓN S.A. y su retorno a PORVENIR S.A.; ii) CONDENÓ a PORVENIR S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES, el valor de la cuenta de ahorro individual de la señora GUZMÁN RODRÍGUEZ, incluyendo para el efecto los rendimientos, las comisiones de administración, el seguro previsional y la garantía de pensión mínima, causadas a partir del 01 de diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003, y a partir del 01 de enero de 2013, debidamente indexadas; iii) CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES el valor de las comisiones de administración causadas a partir del 01 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2012,; iv) CONDENÓ a Colpensiones a reactivar la afiliación de la demandante al RPMPD y sin solución de continuidad; v) ORDENÓ a PORVENIR S.A. comunicar la decisión al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; vi) ORDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora GUZMÁN RODRÍGUEZ, dentro de los 4 meses siguientes al recibo de los dineros por parte de PORVENIR S.A., la pensión de vejez en los términos del artículo 9º de la ley 797 de 2003, la cual deberá calcularse de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993 y la tasa de reemplazo del artículo 34 ibídem, y su disfrute a partir de la fecha en que realizó su última cotización efectiva al sistema, a razón de 13 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos legales; vii) AUTORIZÓ a Colpensiones descontar del retroactivo pensional reconocido, el valor de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud; viii) CONDENÓ a Colpensiones al pago de la indexación al retroactivo pensional que cause el reconocimiento de la pensión; ix) DECLARÓ probada la excepción de mérito de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; y x) CONDENÓ en costas a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A. ABSOLVIÓ a Colpensiones de las costas procesales.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

El apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A. recurre la sentencia de primera instancia de manera parcial, en lo relacionado con la devolución de los gastos de administración deducidos de la cuenta de ahorro individual en los periodos que la demandante estuvo afiliada a la AFP ING y a la AFP PROTECCIÓN, indicando que esta deducción se realizó por disposiciones legales, válidas, aplicables y vigentes contenidas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, ya se trata de dineros encausados a terceros de buena fe como las aseguradoras, por lo que no es posible devolver a Colpensiones unos conceptos por gastos de administración pues en efecto no los ha administrado; devolver estos dineros con cargo al patrimonio de la AFP generaría un detrimento patrimonial y un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones y de manera indirecta a favor de la demandante.

PORVENIR S.A., en el recurso de apelación, discute la declaratoria de la ineficacia y los efectos de restituir todos los dineros, en especial los gastos de administración, toda vez que con esta decisión se están afectando 3 principios fundamentales del derecho que son la confianza legítima, la inescindibilidad de las normas y la sostenibilidad financiera; el primero establece que el Estado no puede alterar de manera súbita las reglas de juego que regulan las relaciones entre ellas, las cuales se han dado de buena fe (Corte Constitucional sentencia C 131 de 2004) y se vulnera por cuanto la Corte Suprema de Justicia le resta valor probatorio al formulario de afiliación; agrega que según las normas de la época el formulario de afiliación era suficiente para probar el requisito de existencia y validez del acto de afiliación. De otro lado, la Corte Constitucional en sentencia C- 345 de 2017 y el artículo 271 de la ley 100 de 1993, respecto a los efectos de la ineficacia en el sentido estricto, sería dejar al afiliado libre para que pueda realizar en forma libre y voluntaria la afiliación o traslado al régimen que decida, por lo tanto, el traslado de los recursos debe hacerse en los términos del artículo 113 de ley 100 de 1993; no es

correcto decir que los efectos de la ineficacia en sentido estricto sea el de retrotraer las cosas a su estado original, pues es un efecto propio de las nulidades que en según la CSJ no se declara en estos casos. Indica que, si el efecto fuera traer las cosas a su estado original y se tuviese que aplicar el artículo 1746 del Código Civil, se incumpliría el otro principio, el de inescindibilidad de la norma, que conforme a lo establecido en la sentencia T 1569 de 2015 debe ser respetado en su integralidad en los pronunciamientos judiciales. Por lo tanto, no se le obligaría al demandante a restituir los estados financieros, pues ellos no existían antes de la suscripción de los formularios de la afiliación. Consecuente con lo anterior, constituye un enriquecimiento sin causa Y vulnera los derechos de terceros, trasladar todos los conceptos aquí ordenados incluyendo los gastos de administración.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la parte **demandante** presentó sus alegatos de conclusión solicitando sea confirmada la sentencia de primera instancia insistiendo en que en el plenario no obra prueba que indique que la entidad demandada haya cumplido con el deber de información, o por lo menos con el buen consejo que establece el artículo 97 del numeral 1º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; asimismo, que los mal llamados actos de relacionamiento deben cumplir con las mismas características del deber de información del traslado inicial y en el caso de la señora GUZMÁN RODRÍGUEZ no se cumplió. Respecto a la pensión de vejez, solicita también su confirmación a cargo de Colpensiones toda vez que la actora cumple con los requisitos de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003, prestación que se debe reconocer desde la última cotización al sistema, que data del 01 de diciembre de 2020, por cuanto desde esa fecha hubo retiro.

CONSIDERACIONES:

Antes de abordar los temas propuestos por los apoderados judiciales en el recurso de apelación, y del grado jurisdiccional de CONSULTA con la finalidad de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, conviene dejar en claro que las siguientes situaciones fácticas están claras a esta altura del proceso: **i)** JAMILE EUGENIA GUZMÁN RODRÍGUEZ nació 05 de abril de 1961; **ii)** su afiliación inicial al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- se produjo el 19 de agosto 1981; **iii)** el 29 de noviembre de 1999 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PORVENIR S.A., **iv)** el 27 de noviembre de 2003 se afilió a la administradora PROTECCIÓN S.A., traslado efectivo a partir del mes de enero de 2004; y **v)** el 31 de diciembre de 2012 se trasladó nuevamente a PORVENIR S.A. entidad en la que se encuentra afiliada actualmente.

Lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por las AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable. Pide consecuentemente se ordene a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por cuanto cumple con los requisitos exigidos para ello.

1. Ineficacia de traslado

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras

de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. Nº 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin

presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento planteado por las AFPs relacionado con que la demandante se trasladó dentro del mismo RAIS, lo que demostraría su intención de permanecer en ese régimen. Y no lo es porque al respecto también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Laboral en múltiples providencias como la SL 5280 del 3 de noviembre de 2021, rad. 85801 en la que sostuvo claramente que *“... los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia CSJ SL1688-2019, las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado, que pueden ocasionar su ineficacia, se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto será CONFIRMADA la decisión de primera instancia.

2. Devoluciones y conceptos.

En cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en

múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido. Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

*(...) En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora JAMILE EUGENIA GUZMÁN RODRÍGUEZ estuvo vinculada a cada entidad.

Se advierte igualmente que la orden a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; además de que la indexación no comporta una sanción contra las codemandadas APFs PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., sino en la materialización del poder adquisitivo de la moneda.

Lo anterior ha sido ordenado por dicha Corporación en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

3. Pensión de vejez.

Finalmente, no existe duda alguna en cuanto a que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la demandante acredita la totalidad de los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, pues al haber nacido el 05 de abril de 1961, significa que los 57 años de edad los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2018.

De otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones que fuera aportado por la demandada PORVENIR S.A., generado el 12 de marzo de 2020, se evidencia que la actora acreditaba, para ese entonces, un total de 1302 semanas cotizadas en toda su vida laboral, las que resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal,

por lo que la decisión del Juez de primera instancia de reconocer la pensión de vejez se encuentra ajustada a derecho.

Asimismo, se confirmará la decisión de primera instancia en lo que tiene que ver el disfrute de la prestación, puesto que en estos casos aplica la necesidad ineludible de acreditar la desafiliación del sistema de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, siendo indispensable el retiro al Sistema de Pensiones o -tal y como lo dijo el Juez de primera instancia- que se acredite la fecha en que realizó la actora la última cotización efectiva al sistema.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., por partes iguales, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma total de \$1.000.000 a favor de la demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día 22 de noviembre de 2021, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., por partes iguales, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma total de \$1.000.000 a favor de la demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1f2e93c106675422b60e5f7301787a38da36f85e1915cfb4c6fcdecf73ae2d7a**

Documento generado en 25/08/2022 10:16:59 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>